



Consejo Económico
y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1998/NGO/44
12 de marzo de 1998

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
54º período de sesiones
Tema 5 del programa provisional

CUESTIÓN DEL EJERCICIO, EN TODOS LOS PAÍSES, DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Y ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS ESPECIALES CON QUE SE ENFRENTAN LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN SUS ESFUERZOS POR HACER EFECTIVOS ESTOS DERECHOS HUMANOS

Exposición presentada por escrito por Defensores de los
Derechos Humanos, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social

[3 de marzo de 1998]

Efectos nocivos sobre el disfrute de los derechos humanos del
traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos
tóxicos y peligrosos

1. La organización Defensores de los Derechos Humanos (DDH), junto con el Instituto del Patrimonio Natural (IPN) ¹ presenta la siguiente exposición escrita a la Comisión de Derechos Humanos.
2. A petición de la Comisión, y en virtud de la resolución 1995/81, la Sra. Fatma Zhora Ksentini fue nombrada Relatora Especial para que examinara los efectos nocivos sobre el disfrute de los derechos humanos del transporte y manejo ilícitos de sustancias tóxicas y recomendara soluciones al respecto. En el desempeño de su mandato, la Relatora Especial ha presentado un informe inicial (E/CN.4/1996/17) y dos informes sobre la marcha de los trabajos (E/CN.4/1997/19 y E/CN.4/1998/10 y Add.1 y 2). En esos informes se documentan distintos ejemplos de la vinculación existente entre el transporte y manejo ilícitos de tóxicos y la violación de los derechos humanos a la vida y la salud. El mandato de la Relatora Especial concluye en 1998.

3. El transporte y el manejo ilícitos de productos tóxicos y peligrosos sigue poniendo en peligro los derechos humanos de muchas personas, en particular en los países en desarrollo. DDH/IPN han documentado distintos casos de abusos de los derechos humanos debidos a la falta de normas o a la incapacidad para aplicar las normas existentes previstas para reglamentar el transporte y el manejo de sustancias tóxicas. Los derechos humanos afectados en esos casos van mucho más allá de los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud. Se ha violado también el derecho de la persona a condiciones seguras de trabajo y de vida, a suministros seguros de alimentos y agua y el derecho a la información y la participación. DDH/IPN siguen documentando casos que demuestran las constantes violaciones de los derechos humanos, incluidos algunos ejemplos más recientes:

- a) DDH/IPN se han enterado de la información incluida en una causa iniciada contra una empresa estadounidense que trabaja en África. Al parecer, la compañía viene aplicando desde hace tiempo la práctica de entregar a la comunidad local barriles utilizados anteriormente para transportar desechos tóxicos. Los barriles están contaminados con residuos de diversos materiales peligrosos, entre ellos ácido clorhídrico y metanol, que según se sabe tienen efectos perjudiciales a corto y largo plazo para la salud. Los miembros de la comunidad utilizan los barriles para almacenar agua, lo que causa un riesgo grave y muy difundido contra la salud. Que sepamos se ha producido por lo menos un accidente debido a esta práctica que ha causado daños graves. Si bien se hicieron recomendaciones internas para que no se entregaran más barriles y se los esterilizara y aplastara antes de deshacerse de ellos, no se aplicaron las recomendaciones. Se despidió a un empleado que se había opuesto a la práctica de suministrar barriles contaminados ²;
- b) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en 1997 un informe que contenía información sobre el manejo y la eliminación inadecuados de desechos tóxicos y petróleo crudo en la región de oriente del Ecuador. Las actividades de explotación del petróleo por el Gobierno y los inversionistas internacionales han contaminado el agua, la tierra y la atmósfera en los lugares donde vive el pueblo huaorani. Algunos de los estudios y encuestas citados informan acerca de tasas considerablemente superiores de abortos espontáneos, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, náuseas y fiebre, enfermedades cutáneas, mortalidad infantil y diarrea, peligro de cáncer y de otras enfermedades graves. En el informe se estima que desde 1972 se han vertido en las tierras y vías de agua del Oriente más de 30 millardos de galones de desechos tóxicos y petróleo bruto ³.

4. La comunidad internacional ha conseguido algunos progresos en el control del traslado y el manejo ilícito de productos tóxicos; muy en particular con la adopción del Convenio de Basilea y la Convención de Bamako. Las metas a largo plazo de estos acuerdos consisten en promover la reducción de la producción de desechos tóxicos y una gestión ecológicamente racional de los productos tóxicos. Si bien estos dos tratados son dos atrevidos pasos en la

buena dirección, no tratan de modo pleno las violaciones de los derechos humanos que entrañan el transporte y el manejo ilícitos de los productos tóxicos. En particular se limitan a indicar a quiénes y a qué se aplican sus obligaciones. Entre estas limitaciones se pueden mencionar: los Estados Unidos, uno de los mayores productores de sustancias tóxicas, no han ratificado el Convenio de Basilea; la Convención de Bamako aún no ha entrado en vigor y los esfuerzos efectuados para conseguir su aplicación están plagados de dificultades entre las que figuran documentación fraudulenta y reclasificación de sustancias tóxicas, incapacidad de detectar y manejar sustancias tóxicas por no disponer de la tecnología necesaria, y el lento desarrollo de los esquemas de responsabilidad y otros mecanismos de ejecución. Ello da lugar a que aún se transporten y manejen ilícitamente productos tóxicos, lo que sigue repercutiendo sobre las comunidades humanas afectadas. Además, no se invocan las obligaciones de ninguno de los tratados a menos que se hayan trasladado sustancias tóxicas de un Estado a otro y no afectan directamente las actividades de las empresas transnacionales, que son los principales productores, transportistas y manipuladores de sustancias tóxicas.

5. Habida cuenta de estas preocupaciones constantes y para reconocer los obstáculos indicados con que tropezó la Relatora Especial en el desempeño de su mandato, DDH/IPN recomiendan que la Comisión renueve el mandato de la Relatora Especial en relación con los efectos nocivos del traslado y manejo ilícitos de sustancias tóxicas durante un período mínimo de dos años. DDH/IPN recomienda que el nuevo mandato incluya los objetivos siguientes:

- a) Proseguir la labor iniciada con el mandato original de obtener información sobre incidentes específicos, tales como los comunicados en el presente documento, y preparar una lista anual de países y empresas transnacionales que practiquen el transporte y el manejo ilícitos de productos tóxicos y peligrosos, prestando especial atención a los casos que no entren en el ámbito del Convenio de Basilea. Se alienta a la Comisión a que asigne fondos suficientes para que se puedan llevar a cabo por lo menos dos visitas in situ a fin de obtener información más detallada y determinar cuáles son los obstáculos que impiden desarrollar mecanismos de presentación de informes más coherentes y amplios acerca de las violaciones de los derechos humanos.
- b) La Relatora Especial debería prestar también especial atención a la función de las empresas transnacionales y a su participación en las violaciones de los derechos humanos debidas al traslado y manejo ilícitos de productos tóxicos. La comunidad internacional ha tenido problemas considerables para poder influir sobre la conducta de las empresas transnacionales por medio de otros instrumentos, sin embargo el mandato original de la Relatora Especial exigía específicamente información sobre las actividades de las empresas transnacionales. La Relatora Especial podría considerar la oportunidad de llevar a cabo una encuesta voluntaria entre las empresas transnacionales que participan en la producción, transporte y eliminación de productos tóxicos y peligrosos. La encuesta podría

averiguar en qué medida se tiene conciencia de las obligaciones de derechos humanos internacionales, las normas establecidas en el proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales, solicitar información en relación con declaraciones innovadoras de misiones/políticas, prácticas comerciales, programas de capacitación, métodos de evaluación o programas de participación de la comunidad que favorezcan la protección de los derechos humanos y ofrezcan la oportunidad de informar acerca de su historial de derechos humanos. La Relatora Especial debería también estudiar las diversas formas en que podría repercutir la elaboración de un acuerdo multilateral sobre inversiones ⁴ sobre la capacidad de las comunidades locales y los Estados para aplicar y reforzar las actuales salvaguardias internacionales de derechos humanos, ambientales y sociales.

- c) Continuar y ampliar la coordinación con la Secretaría del Convenio de Basilea para facilitar y asegurar que las obligaciones de derechos humanos correspondientes al transporte y manejo de sustancias tóxicas estén integradas en el desarrollo y la aplicación de normas internacionales. Esta cooperación ampliada ofrecería oportunidades singulares de apoyo recíproco entre los órganos ambientales y de derechos humanos que impediría la duplicación de esfuerzos. En particular, el mandato debería centrarse en determinar posibles vías concretas de cooperación entre la Comisión y las actividades de la Secretaría. DDH/IPN recomiendan que se estudien las siguientes posibles esferas de coordinación:
 - i) Colaboración con el Grupo de Trabajo Especial de expertos jurídicos y técnicos en su preparación del proyecto de protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los transportes ilícitos de desechos ⁵. Considerar la posibilidad de indemnizar las violaciones de los derechos humanos en calidad de daños o elaborar un mecanismo de sanción y financiación en relación con los derechos humanos. Además, recomendar actividades específicas que podrían abordarse con la ayuda de un fondo de indemnización, por ejemplo, nuevas investigaciones sobre las repercusiones sanitarias de productos tóxicos particulares o elaboración y apoyo de programas de educación pública para facilitar la participación en la planificación, la vigilancia y la protección de los derechos humanos y las repercusiones ambientales de los productos tóxicos.
 - ii) Colaboración con el Grupo de Trabajo Técnico en la creación de centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología ⁶. Estudiar la posibilidad de incluir un módulo de capacitación en materia de obligaciones de derechos humanos y repercusiones de los productos tóxicos para funcionarios del Gobierno, funcionarios de aduanas y otros funcionarios ejecutivos responsables de la aplicación de las obligaciones del Convenio de Basilea. La Relatora Especial podría estudiar

también la posibilidad de desarrollar un paquete conjunto especializado destinado a la comunidad que se gestionaría por medio de los centros regionales para aumentar la conciencia en materia de derechos humanos y de repercusiones ambientales en las comunidades donde se manejan y eliminan productos tóxicos.

- iii) Colaboración con el Grupo de Trabajo Técnico en el desarrollo de un formulario para casos de tráfico ilícito ⁷. Estudiar la posibilidad de incluir o desarrollar un formulario para informar acerca de los derechos humanos para comenzar a registrar y seguir las violaciones de derechos humanos junto con la información de violaciones ambientales. Con ello se aumentaría la conciencia de la relación que existe entre el manejo ilícito de productos tóxicos y las posibles violaciones de derechos humanos y se ofrecería a la comunidad internacional un mecanismo más coherente y completo para seguir los impactos del manejo ilegal de productos tóxicos, que causan al mismo tiempo violaciones ambientales y de derechos humanos.
- d) DDH/IPN apoyan la recomendación de la Relatora Especial de que se elaboren proyectos concretos que puedan ser desarrollados conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Secretaría del Convenio de Basilea, la OUA, el PNUMA y otros interesados (E/CN.4/1998/10/Add.2, párr. 62). La continuación del mandato de la Relatora Especial será esencial para prestar asistencia en el comienzo y el desarrollo de proyectos eficaces.

Notas

1.El Instituto del Patrimonio Natural es una organización benéfica y no gubernamental que ofrece asesoramiento y promoción a las organizaciones de interés público y las instituciones gubernamentales en materia de problemas de recursos naturales, incluida la conservación internacional y los derechos humanos.

2.Causa pendiente ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos de América.

3.Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/SER/V/II.96 doc. 10/Rev.1, 24 de abril de 1997.

4.David Rowan, "Analysis: Corporations v. States: Meet the new world government-These multinationals will be able to take governments to court under a worrying new agreement to be finalized next week. What happened to democracy?", página de The Guardian, WL 3078560, 13 de febrero de 1998.

5.Resultados de la labor del Grupo de Trabajo Especial de expertos jurídicos y técnicos encargado de examinar y elaborar un proyecto de protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (UNEP/CHW.4/12), cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea, Malasia, 23 a 27 de febrero de 1998. La última versión del proyecto de protocolo figura en el documento UNEP/CHW.1/WG.1/5 de 23 de mayo de 1997.

6.Véase UNEP/CHW.4/11 y 14.

7.Ibíd.
